

I. MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES GENERALES

A. Componentes de las políticas estatales

De acuerdo al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)(1) en el análisis de las políticas estatales es posible diferenciar tres momentos que son:

1. las formulaciones
2. las acciones
3. los resultados

Las formulaciones de la política se refieren a la explicitación de lo que el Estado se propone realizar. En esto se incluyen diversos aspectos:

- a) los sujetos que definen la problemática
- b) los problemas que son priorizados y los sectores que efectivamente son beneficiados
- c) el contexto económico, político y social que influye en la formulación de la política
- d) las orientaciones contenidas en la formulación (documentos o discursos) en términos de objetivos y metas
- e) los mecanismos utilizados para la formulación de la política

Las acciones de política son las medidas que se adoptan para poner en práctica las formulaciones de la política, entre las cuales se deben considerar:

- a) asignación de recursos, financieros y humanos
- b) creación de mecanismos para ejecutar la política estatal: legislación, creación de entidades o instituciones
burocráticas, como órganos responsables o de coordinación
- c) las diversas actividades concretas llevadas a cabo

Los resultados de las políticas deben entenderse en dos sentidos: uno, como "producto", o sea, el logro de objetivos y metas formalmente explicitadas; esto es, la eficacia. El otro sentido, como "impacto social", lo cual se refiere al efecto ocurrido en el contexto social; es decir, los cambios, transformaciones y/o modificaciones, operados en las condiciones materiales de vida de los que se constituyen en beneficiarios directos de las acciones de política concretadas.

Ahora bien, en el análisis de las medidas concretas y en el destino de los recursos y en los resultados, se podrá determinar la correspondencia entre los planteamientos y la ejecución de los mismos, que permitir visualizar la capacidad ejecutiva real del aparato estatal, así como las condicionantes impuestas por el contexto económico y político.

Un elemento adicional de análisis es que en el proceso de conformación y ejecución de una política estatal, además del Estado intervienen otras fuerzas sociales, las cuales dependiendo de su capacidad de poder influyen, en mayor o menor grado, en los

diversos aspectos de una política determinada. Por otra parte, se trata de políticas que sufren diversos grados de reformulación acorde con los matices ideológicos que le imprimen los distintos gobiernos.

Dentro de la perspectiva anteriormente planteada, esta investigación tiene como objeto de estudio la política de desarrollo del Estado guatemalteco que el gobierno demócrata cristiano ha formulado e implementado en sus primeros 18 meses de gestión (1986-1987).

Por política de desarrollo se entenderá la formulación, las acciones y los resultados alcanzados por el Estado en relación a las necesidades básicas de la población guatemalteca. Para los propósitos de esta investigación se seleccionaron como necesidades básicas las relacionadas con el empleo y el ingreso, de las cuales dependen la satisfacción, a un nivel adecuado, de la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. También se consideró importante analizar la situación de organización y participación de los sectores populares, ya que la implementación de una política de desarrollo que responda a sus necesidades depende, en gran medida, de su capacidad de influir en la misma.

B. Antecedentes de la actual política de desarrollo

Históricamente, en Guatemala ha prevalecido un modelo de desarrollo que enfatiza básicamente el crecimiento económico. Según el economista Luis Arturo del Valle, en un trabajo para la CEPAL(2) Guatemala vivió una etapa de crecimiento económico extraordinario, del 5% anual, que duró por tres decenios, de la posguerra a 1978 aproximadamente, debido sobre todo a factores externos favorables, que le permitió al país colocar sus productos de exportación a buenos precios en el mercado internacional. Sin embargo, dicho crecimiento favoreció solamente a reducidos sectores de la población, quedando excluidos amplios sectores sociales, especialmente en el área rural, por lo cual, según del Valle, se mantuvieron o extendieron las desigualdades sociales.

Aunado a este modelo de desarrollo excluyente en lo económico, en lo político se implantaron gobiernos autoritarios, en los que predominó el control militar, dentro de un esquema de democracia formal, con partidos y elecciones, que no reflejaban la voluntad popular. Así, en las elecciones presidenciales de 1974 y 1978, aun cuando todos los candidatos eran militares, se alteraron los resultados electorales y fueron impuestos los candidatos del partido oficial. En las elecciones de 1982 se intentó repetir la historia por tercera vez, pero en esta ocasión se frustró debido al golpe de Estado de marzo de 1982(3).

Sin embargo, ya para entonces la crisis de la sociedad guatemalteca se había generalizado reflejándose en una agudización de las contradicciones a todo nivel: en lo económico, político, militar, social e ideológico.

Guatemala sufre el impacto de una recesión económica, debido en gran parte a la caída de los precios de sus productos de agroexportación en el mercado internacional. Esto trae consecuencias en los niveles de empleo, el ingreso de divisas, la recaudación fiscal y en la economía en general. También se observa una masiva fuga de capitales al exterior provocada por la crisis política a nivel nacional y regional. Se produce un descenso en la inversión pública y privada, un incremento desproporcionado de la deuda externa, inestabilidad monetaria y cambiaria y desequilibrio fiscal, así como incremento del desempleo y del subempleo. Además, se da un proceso inflacionario acelerado, el cual contribuye a profundizar aún más las ya precarias condiciones de vida de amplios sectores de la población(4).

Los gobiernos instalados a través del fraude carecen de legitimidad, aparte que la corrupción y la ausencia de políticas estatales a favor de las mayorías, hacen que dichos regímenes carezcan de apoyo popular. A fines de los años setenta surge un movimiento popular constituido por organizaciones sindicales, campesinas, de pobladores, estudiantiles y políticas que ejercen una creciente y masiva presión reivindicativa, la cual aunada a la intensificación de la actividad de organizaciones guerrilleras, provoca una reacción por parte del Estado. En el período del régimen del General Romeo Lucas García (1978-1982) y los gobiernos de facto de los generales Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Óscar Mejía Víctores (1983-1986) se vive una violencia política sin precedentes en el país.

A nivel ideológico, la crisis se manifiesta en un gran descontento y cuestionamiento por parte de amplios sectores de la población que se ven afectados por la crisis en todas sus consecuencias. Tanto el movimiento popular como las fuerzas guerrilleras logran captar las simpatías y el apoyo de vastos sectores a nivel urbano y rural.

Ante esta situación de crisis, que se hace más grave a finales del gobierno del general Lucas García, se produce el golpe de Estado de marzo de 1982, que coloca al general Ríos Montt, quien a su vez es relevado del poder por el general Mejía Víctores, por medio de otro golpe ejecutado en agosto de 1983. La importancia de estos gobiernos de facto es que a nivel estatal se va perfilando una recomposición del Estado orientada a resolver la crisis en que se encuentra el país, y a asegurar el sistema económico-social vigente introduciendo ciertos cambios que no lo afectan en sus estructuras. A nivel económico se van a plantear las políticas que pretenden revertir la recesión económica; en lo político se busca establecer la legitimidad de los gobiernos y de la estructura de mediación política, conformada por los partidos políticos y los procesos electorales. En el campo ideológico el propósito es lograr el consenso social, así como la "integración" de los diversos sectores de la sociedad polarizados política e ideológicamente dentro de lo que se denomina como "identidad nacional".

En el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD)(5), postulado por la Junta Militar de Gobierno que tomó el poder en 1982, se plantean las cuatro principales áreas problemáticas que necesitaban resolverse:

- 1) Estabilidad política: el propósito es consolidar la legitimidad de los gobiernos a nivel nacional e internacional, para lo cual se plantea el retorno a un régimen de legalidad, así como la restauración del sistema electoral y de partidos políticos.
- 2) Estabilidad económica: los objetivos son revertir la recesión económica y resolver los problemas derivados de la pobreza de la población.
- 3) Estabilidad psico-social: el fin es contener los avances logrados por la "subversión" entre el campesinado, los indígenas y analfabetos.
- 4) Estabilidad militar: la meta es derrotar a la "subversión armada".

En el enunciado del "concepto estratégico básico" se postulan las siguientes adecuaciones:

- a) Reformas administrativas en la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado, para "coordinar e integrar los planes y programas antisubversivos a nivel de los órganos políticos del país".
- b) "Adecuación de la estructura y funcionamiento del ejército de Guatemala y de los cuerpos de seguridad al enfrentamiento y combate eficaz de los movimientos y grupos subversivos".
- c) Mejoramiento de la economía, dando "atención a los problemas económicos prioritarios de la población", complementado con la puesta en marcha de "programas tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de las clases desposeídas".
- d) Conducción de "programas destinados a formar y mantener un nacionalismo compatibles con las tradiciones del país".
- e) Finalmente, a nivel internacional, se plantea "el mejoramiento de la imagen de Guatemala", a través de "acciones definidas y agresivas".

En otras palabras, una reorganización estatal para hacer más eficiente, tanto en lo político como en lo militar, la implementación de políticas tendientes a reactivar la economía y atender necesidades básicas de la población, con el objetivo de disputarle la base social a la guerrilla e impulsar medidas orientadas a captarla ideológicamente, lo cual es complementado con un mejoramiento de la imagen internacional de Guatemala.

A través de sus diversas campañas militares, que se dan a un alto costo social en términos de muertos, heridos, desplazados y refugiados, el ejército desarticula el apoyo poblacional de la guerrilla, la cual, de acuerdo al ejército, estaba constituida por cerca de 276,000 simpatizantes. Para reubicar y controlar a la población del área rural se

crean los Polos de Desarrollo, y las Patrullas de Autodefensa Civil.

Entre las medidas de reorganización estatal destacan la dislocación operativa del ejército y de los cuerpos de seguridad, así como la creación de las Coordinadoras Interinstitucionales, con estructuras que van desde el nivel nacional hasta el nivel local, con el predominio del ejército(6).

Con respecto a los objetivos de reactivar la economía y atender las necesidades básicas de la población, los gobiernos de facto tuvieron mayores dificultades. La empresa privada prefirió mantener sus capitales en el exterior ante la inestabilidad política y se opuso tenazmente a cualquier medida que implicara una redistribución de los costos de la crisis, como una posible reforma tributaria o bien una reforma agraria.

Por otro lado, la deteriorada imagen de los gobiernos militares a nivel internacional, debido a la constante violación a los derechos humanos, había significado la salida de diversas organizaciones no gubernamentales(7), así como limitaciones en cuanto a la captación de los recursos financieros internacionales necesarios para llevar a cabo programas y proyectos oficiales.

En lo ideológico se dan medidas tendientes a restaurar el régimen de legalidad, con la elección de una Asamblea Constituyente en 1984, la cual se encarga de redactar una nueva Constitución Política; posteriormente se retorna al sistema de partidos políticos y procesos electorales generales, que sealan el traspaso del gobierno de manos de los militares a los civiles.

El ejército como institución tenía serias limitaciones para implementar a plenitud el proyecto de consolidar y modernizar el Estado y la sociedad. La participación de altos oficiales castrenses en la corrupción gubernamental y en la implementación de los fraudes electorales, había desprestigiado a la fuerza armada, aparte de que su responsabilidad en la violencia política hacía difícil que captase el apoyo popular o el reconocimiento internacional. La fórmula viable lo constituyeron las elecciones para la integración de un gobierno civil que se encargara de ejecutar los lineamientos ya establecidos en el período anterior.

A nivel externo, dicho proceso fue apoyado por la administración de Ronald Reagan, la cual impulsa la "democratización" en la región centroamericana a través de procesos electorarios.

Con el objeto de tener una mejor comprensión sobre el actual gobierno civil, en la siguiente sección se presenta una breve historia de la Democracia Cristiana Guatemalteca, partido político cuyos principales dirigentes vinieron planteando desde mediados de los años setenta la posibilidad de "compartir" el poder con los militares en Guatemala.

C. Antecedentes políticos del partido de gobierno(8).

Por el papel hegemónico que el ejército ha tenido en la conducción de los gobiernos, sobre todo tras un período de pacificación política como la de principios de los años ochenta, cualquier partido que hubiera ganado las elecciones en 1985 habría tenido que sentarse a la mesa de negociaciones para conocer los límites de su radio de acción. Buena parte de los partidos que participaron como el Movimiento de Liberación Nacional, el Institucional Democrático, el Central Auténtico Nacionalista y el Revolucionario C registraban en su historia esa experiencia. La Democracia Cristiana, por su lado, si bien es la primera vez que asume como partido la conducción del gobierno, en su estrategia política (ya sea de sobrevivencia, de expansión o consolidación), nunca descartó una gestión en concertación con los militares. Un breve repaso de su historia puede ayudar a entender mejor el papel que juegan actualmente los demócratas cristianos en el actual proceso político de Guatemala.

La Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) tiene sus orígenes en un grupo de universitarios que pertenecían al movimiento de Acción Católica Universitaria, auspiciado por sacerdotes jesuitas. Durante los gobiernos de 1944 a 1954, ese movimiento mantuvo una oposición frontal a las políticas que estos impulsaron, y entre sus actividades contra el comunismo C que era considerado el principal riesgo para el país publicaron la revista Acción Social Cristiana.

La DCG se funda después del golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz (junio de 1954). Sus promotores son básicamente las personas que quedaron al margen del partido Movimiento Democrático Nacional, matriz del actual Movimiento de Liberación Nacional. Entre los fundadores estuvieron René de Len Schlotter, actual ministro de desarrollo urbano y rural; Roberto Carpio Nicolle, actual vice-presidente; Trinidad Uclés, quien años después militó en el conservador Partido Institucional Democrático, y José García Bauer, actual diputado por el partido Unión del Centro Nacional.

Desde su decidido apoyo al coronel Carlos Castillo Armas (quien con el resuelto respaldo de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense dirigió desde Honduras la acción contra Arbenz), los demócratas cristianos se caracterizaron por su anticomunismo. Rechazaron las medidas que pudieran vigorizar la política de desarrollo del gobierno central y que pretendiera una redistribución de la riqueza. Las raíces ideológicas de tal conducta tenían la referencia, en el caso de Guatemala, de la Reforma Liberal de finales del siglo XIX que redujo los cuantiosos bienes de la Iglesia Católica y significó una mayor participación del Estado en el desarrollo del país. La DCG veía en las políticas reformistas de Arbenz una versión del comunismo internacional, y se presentaba como una tercera opción fuera del comunismo y del capitalismo. Concebía los cambios del país en base a los postulados derivados de la Doctrina Social de la Iglesia (Católica), sólo que bajo el nombre de Justicia Social Cristiana.

Para las elecciones presidenciales de 1957, la DCG participó con Miguel Asturias Quinez como candidato. En esa época impulsó la formación de la Federación Autónoma Sindical (FAS), que luego con el nombre de FASGUA salió de la esfera de influencia demócrata cristiana.

En 1964 se originó un debate en el interior de la DCG, cuando el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia (1963-66) convocó a elecciones para integrar una Asamblea Constituyente. La corriente que se oponía a participar encabezada por Len Schlotter y miembros del recién formado Frente Estudiantil Social Cristiano (FESC). Entre los líderes de ese frente universitario estaban, entre otros, el actual mandatario Vinicio Cerezo Arvalo, su esposa Raquel Blandín de Cerezo, el canciller del gobierno del general Mejía Victores y actual embajador ante las Naciones Unidas, Fernando Andrade Daz, y el presente ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Cabrera. El FESC tuvo como escenario principal a la Universidad Nacional de San Carlos, donde representaba a la "derecha" del movimiento estudiantil.

El impulso de un programa de trabajo más dinámico, promoviendo el sindicalismo y el cooperativismo, llevó a Len Schlotter y a sus más cercanos colaboradores a ocupar el liderazgo del partido para mediados de los años sesenta.

La DCG se vio obstaculizada de participar en las elecciones presidenciales de 1966, debido a su poca colaboración con el régimen de facto de Peralta Azurdia. En las elecciones presidenciales de 1970, la DCG postuló sin éxito al mayor del ejército y economista Jorge Lucas Caballeros, quien contando con su propio caudal de simpatizantes obtuvo el 20% de los votos. Sin embargo, la DCG logra ubicar en la asamblea legislativa a Len Schlotter, Cerezo Arvalo y Julio Celso de Len. Para entonces el partido ya había empezado a expandirse fuera de la capital.

En esos años, los demócratas cristianos de Guatemala se vieron envueltos en el debate que se estaba produciendo entre sus colegas de América Latina. En ese contexto, un grupo de profesionales integrados al Instituto para el Desarrollo Económico-Social para América Central (IDESAC), comenzó a sostener posiciones divergentes a las de Len Schlotter. En la Central Nacional de Trabajadores (CNT), donde la DCG tenía preponderancia (y que al igual que en FASGUA no tardaría en perderla), también se cuestionaron los planteamientos poco críticos del partido con respecto a la situación socioeconómica del país, su débil identificación con los sectores populares y su interés centrado en sólo ganar elecciones. El corolario de este debate fue la salida de varios cuadros importantes del partido, algunos de los cuales se inte

Para las elecciones de 1974 la DCG, no obstante contar con alrededor de 120,000 afiliados, decide continuar con su estrategia de acercamiento al ejército y nuevamente apoya a un militar: al ex-Jefe del Estado Mayor de la institución armada, general Efraín Ros Montt, quien pierde la presidencia ante el general Kjell Laugerud con el fraude electoral(9). Ese hecho, sin embargo, no habrá de impedir que la DCG aceptara

colaborar con quienes gobernarán.

No es de más recordar que el programa de la DCG durante el proceso electoral de 1974 se titulaba "Camino hacia la Paz" y que el discurso de su candidato, el general Ros Montt, se centró en el tema de la "Salvación Nacional", que no estaba distante del proyecto del gobierno de facto que se instaló en 1982. Ahora bien, en 1974 el programa de la DCG planteaba reformas en algunas áreas como educación, salud e incluso en el sector agrario; ello sin embargo habría de ser obviado en 1985.

Durante la gestión del general Laugerud (1974-78) se registró un auge del movimiento popular. El grado de vinculación de la DCG con los trabajadores fue puesto a prueba, resultando en que la CNT, la confederación que los demócratas cristianos habían impulsado y que estaba afiliada a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, rompiera sus lazos con ellos.

Para las elecciones de 1978, oficiales del ejército se acercaron a la DCG para captar su apoyo para la elección del general Romeo Lucas García, el candidato de los partidos oficiales. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, y en esa oportunidad la DCG apoyó como candidato al general Ricardo Peralta Méndez, a quien se consideraba como un mejor candidato por haber dirigido el Comité de Reconstrucción Nacional después del terremoto de 1976. De esta manera la DCG reconfirmó la tesis que para gobernar debe existir un entendimiento con representantes del poder real, que había sido sostenida por Vinicio Cerezo en su ensayo "El Ejército como Alternativa", editado en 1975.

De todas formas, el general Lucas García fue impuesto por medio del fraude electoral. De amplio conocimiento es la intensa y generalizada acción represiva del gobierno de Lucas García, y no sobra hacer la anotación de que incluso la DCG fue afectada por la violencia al ser asesinados alrededor de 300 de sus militantes.

A diferencia de los partidos de tendencia socialdemócrata, como el Frente Unido de la Revolución (FUR), fundado por Manuel Colom Argueta y el Partido Revolucionario Auténtico (PRA), de Alberto Fuentes Mohr (antecedente del actual Partido Socialista Democrático), la DCG durante el régimen de Lucas García no impulsó una clara estrategia de oposición. Más bien se inclinó por una oposición silenciosa "no oficial", en tanto que los partidos mencionados llegaron a apoyar y participar en el Frente Democrático Contra la Represión (FDCR), una amplia coalición formada por organizaciones sindicales, campesinas, de pobladores, estudiantiles, políticas y religiosas, que se formó entre 1977-78.

Para las elecciones de 1982 la DCG se alió al Partido Nacional Renovador (PNR), postulando al dirigente de este partido, Alejandro Maldonado Aguirre, como candidato presidencial, y a Roberto Carpio Nicolle, de la DCG, como candidato vicepresidencial. Por tercera vez consecutiva, como lo habían hecho en las elecciones de 1974 y 1978, una "dique" de generales en alianza con dirigentes de partidos políticos de derecha, intentaron imponer al candidato oficial, esta vez el general Ángel

Anbal Guevara, por medio del fraude electoral. Dicha maniobra, aunada a la corrupcin e ineficiencia gubernamental generalizada, e inestabilidad poltica existente, condujeron al golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, que eventualmente coloc al general Efran Ros Montt como Jefe de Estado.

Durante el rgimen de Ros Montt los partidos polticos ven suspendidas sus actividades al derogarse la Constitucin as como las leyes que regulan su accionar. No es sino hasta el primer aniversario del golpe que se emiten las nuevas leyes electorales y de partidos polticos.

En junio de 1983, dos meses antes del golpe de Estado, la dirigencia demcrata cristiana demand pblicamente la fijacin de una fecha para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y que el ejrcito tomara la iniciativa para convertirse en una institucin que hiciera factible la democracia.

El 8 de agosto, Ros Montt es relevado del poder por otro general, Oscar Meja Vctores, su ministro de la Defensa. En dicho gobierno tom cuerpo el proyecto de retorno a un rgimen constitucional, y la DCG inici una estrategia de acercamiento a la empresa privada. En su propaganda pblica la DCG enfatizaba tres puntos:

1. Era un partido que no haba estado comprometido con la represin.
2. Era un partido que estaba fuera del espectro de los partidos de derecha, los cuales sufran el impacto directo

del agotamiento del sistema poltico donde haban sido co-protagonistas en el decenio del setenta.

3. Era adems un partido que aparte de admitir la posibilidad de un co-gobierno armnico con militares, podra

servir como mediador ante la empresa privada que en los ltimos aos haba recobrado su conocida capacidad beligerante.

En las elecciones de 1985 todos los candidatos presidenciales, sin excepcin, fueron civiles. La imagen del ejrcito estaba sumamente deteriorada y eso haca imprescindible la aparicin de rostros civiles que oxigenaran un Estado que garantizara el status quo: que proporcionara estabilidad para reafirmar el sistema y, si mucho, hacer reajustes.

Pero en el traslado del gobierno a los civiles inciden tambin otros factores: la empresa privada, que desconfiaba de las intenciones de la cpula militar, peda certidumbre Ccomo la unificacin del tipo de cambioC para participar en la reactivacin econmica; la clase poltica renovada y ampliada exige elecciones y un escenario ms estable para poder desenvolverse, y la poblacin de los estratos ms golpeados por la violencia necesitaban un parntesis que les permitiera recobrase en grado mnimo, de la violencia y la crisis socioeconmica que les haba causado heridas profundas. Por otra parte, las campaas militares llevadas a cabo desde finales de 1981 haban logrado contener y llevar a un descenso la actividad del movimiento guerrillero.

En cuanto a la variable externa, debido al aislamiento internacional provocado por las numerosas condenas a la violación de los derechos humanos, se hacía imprescindible crear la expectativa de que con un traspaso de gobierno a los civiles dicha situación iba a ser controlada. Estas expectativas habrán de facilitarle a la administración civil el acceso a recursos financieros y ampliar sus relaciones bilaterales con otros gobiernos. Además, la política "de neutralidad" en relación a la crisis política centroamericana lanzada desde los regímenes de facto hizo posible proyectar cierta capacidad autónoma frente a las presiones externas. Como se verá a partir de 1986, la legitimidad del sistema político vendrá a potencializar estas ventajas.

NOTAS

- (1) ICAP, Diseño de Investigación: Estado, Políticas Públicas y Pobreza en Centro América, San José, Costa Rica, 1982.
- (2) Luis Arturo del Valle, Efectos de la Crisis Sobre las Condiciones Económicas y Sociales de la Población de Guatemala, CEPAL, octubre 1986.
- (3) Para diversos análisis de la situación política de Guatemala en la época contemporánea, véase: la colección de ensayos de Mario Solrzano Martínez, Guatemala: Autoritarismo y Democracia, San José, Costa Rica: EDUCA-FLACSO, 1987; así como "Los treinta años de polarización política" en Inforpress Centroamericana, Guatemala: Elecciones de 1983, pp. 5-15. Pueden consultarse también diversos artículos en la revista Política y Sociedad, de la Escuela de Ciencia Política, de la Universidad de San Carlos, Guatemala; así como la revista Política, del Instituto Centroamericano de Documentación e Investigaciones Sociales (ICADIS) en Costa Rica.
- (4) Véase: "Elecciones generales tropiezan con crisis económica", en Inforpress Centroamericana, op. cit., pp. 17-28.
- (5) Junta Militar de Gobierno, Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, (copia mimeografiada), Guatemala, abril de 1982.
- (6) Cf. Inforpress Centroamericana, op. cit., pp. 39-48.
- (7) Véase: Shelton Davis y Julie Hodson, Witnesses to Political Violence in Guatemala: The Suppression of a Rural Development Movement, Oxfam America, 1982.
- (8) Para mayores detalles véase: revista Política y Sociedad, Número Extraordinario de abril de 1978, de la Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos; "El papel de la Democracia Cristiana en la actual coyuntura centroamericana", en Mario Solrzano Martínez, op. cit., pp. 203-227. Cf. también la publicación semanal de Inforpress Centroamericana. Para el punto de vista de la Democracia Cristiana, véase: Hilda Caldera T. y Benjamín Santos, La Democracia Cristiana en Centroamérica, Guatemala, INCHP, s. f. (c. 1987), así como las diversas publicaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) en Guatemala.
- (9) Ocho años más tarde, a través del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, el Gral. Ros Montt intentó desempeñar la presidencia que en 1974 le fue denegada.